

**MUJERES RURALES EN COLOMBIA, SITUACIÓN Y ENFOQUE EN LA POLÍTICA DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS.**

Lynda Mayerli Ospina Rengifo[[1]](#footnote-1)

Valdemar João Wesz Junior[[2]](#footnote-2)

**GT 3**: Posse, ocupação, propriedade privada da terra e regularização fundiária: diálogos sobre os instrumentos de dominação e concentração e as estratégias de democratização de terras.

**RESUMEN**

El objetivo del presente trabajo es analizar el programa de Restitución de Tierras desde su enfoque de género y la situación actual de las mujeres rurales en Colombia. La metodología parte de una revisión bibliográfica sobre informes del estado y las características de la mujer rural, así como datos divulgados por DANE y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, los resultados indican que la situación actual de la mujer rural está enmarcada por la vulnerabilidad y la desigualdad en la propiedad de la tierra, en ese sentido, los marcos legales que buscan garantizar sus derechos son el resultado de luchas sociales de más de 30 años en contextos de violencia y que hoy intentan ser implementados de manera transversal como es el Programa Mujeres, implementado al interior de la política de Restitución de Tierras, como mecanismo de atención restaurativa que consagra la ley para las víctimas del conflicto armado.

Palabras clave: Restitución de tierras, despojo, mujer rural, política pública.

**INTRODUCCIÓN**

Las discusiones y estudios sobre las desigualdades en el espacio rural latinoamericano, se realizan en medio de importantes limitaciones. Para el caso de la distribución de la tierra, si bien existen estudios que proporcionan información detallada sobre el acaparamiento y su distribución, los datos cuantitativos existentes no permiten realizar análisis comparativos desde una escala regional, según Deere (2019), esto se debe a que los procesos censales son afectados por factores políticos, económicos, y metodológicos. Por una parte, existe un proceso de representación en las instancias políticas de sectores como los grandes propietarios, que terminan por influenciar la frecuencia y periodicidad de los censos agropecuarios nacionales, de otro lado, es probable que existan sesgos metodológicos que redunden en la calidad de la información que se obtiene a través de estos, lo que dificulta la realización de análisis sobre la distribución de los recursos, así como cuestiones más específicas, como los estudios sobre género y desigualdad rural.

Aun con esto, estimaciones como las realizadas por OXFAM (2016), dan muestra de las desigualdades en relación a este aspecto en los países latino-Americanos, pues más del 50% de la tierra cultivable, se encuentra concentrada en el 1% de las propiedades rurales, siendo especialmente alto para los países sudamericanos, donde el coeficiente de Gini para la distribución de la tierra alcanzó el 0,85, calculado a partir de informaciones obtenidas en un periodo de entre 1984 a 2008 en 10 países suramericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela).

Los censos agropecuarios, las encuestas nacionales agropecuarias, así como otras formas de recolección de información, vistos desde una perspectiva de género, proporcionan datos que se limitan al sexo del productor principal (LEON, 2011), en este sentido, las aproximaciones desarrolladas por Deere (2019), para 16 países latinoamericanos con datos de los censos entre 2001 y 2017, muestran que la gestión de la unidad de producción por la mujer varía entre el 8% y cerca de un 30%. Además el análisis de la autora, realizado a partir de la comparación de datos de 8 países en dos periodos de tiempo diferentes donde se incluyera la variable del sexo en sus productores principales, muestra un aumento notable en Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Frente a estas cifras es importante considerar que la forma en que se conduce una entrevista, puede influir en la subestimación de la mujer y su papel en la gestión principal de la unidad rural o de manera conjunta con algún miembro masculino del hogar, frente a esto León (2011), apunta que debido a las normas de género predominantes, las mujeres que se identifican como agricultoras principales de una parcela de tierra que les pertenece, lo hacen porque son propietarias de la misma, y esto según la misma autora encuentra razón en que la consideración sobre la agricultura como una actividad principalmente masculina, hace que al responder un cuestionario censal la declaración como propietarias o agricultora principal se da especialmente cuando no reside ningún adulto masculino en el hogar.

En Colombia, las mujeres rurales no son ajenas a estas construcciones sociales de género, que se ven aún más intensas en contextos determinados por cuestiones políticas complejas como el conflicto armado, el cual cuenta con un carácter ciertamente rural, que se ha visto reflejado en las últimas décadas a través de fenómenos como el despojo de tierras, lo que finalmente contribuye a la profundización de las desigualdades no sólo en términos de dominio sobre la propiedad rural, sino en acceso a servicios básicos, educación, y el ejercicio de las voluntades. En este sentido, el objetivo del presente trabajo es analizar el programa de Restitución de Tierras desde su enfoque de género y la situación actual de las mujeres rurales en Colombia. Para alcanzar este objetivo, la metodología incluye revisión bibliográfica de informes y estudios sobre el estado y las características de la mujer rural, así como datos divulgados por DANE y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Finalmente este trabajo se estructura en tres partes; la primera describe la situación socioeconómica actual de las mujeres rurales en Colombia a partir de datos estadísticos. En la segunda parte se realiza una revisión de la ley de la mujer rural y sus principales precedentes. Finalmente, la tercera parte, analiza brevemente el proceso de restitución de tierras en Colombia con enfoque en la mujer rural.

**CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LA MUJER RURAL EN COLOMBIA.**

La población rural en Colombia alcanza los 12. 250. 647 personas, es decir el 23,8% de la población nacional, y de este porcentaje el 48,2% son mujeres (DANE, 2022a). Casi una tercera parte de estas mujeres se auto reconocen dentro de algún grupo étnico, como indígenas (13,2%), negras, mulatas, afrodescendientes o afrocolombianas (11,1%), y se localizan principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Córdoba y Cundinamarca (DANE, 2022a). Las mujeres desempeñan un papel crucial en términos de producción agrícola y alimentaria, pues representan cerca de la mitad de los agricultores familiares del país, sin embargo conviven con desigualdades con respectos a los hombres en las áreas rurales y las demás mujeres que habitan los espacios urbanos. La composición de los hogares rurales reflejan la reproducción de la lógica patriarcal de la familia rural, pues los 3,8 millones de hogares, son encabezados en su mayoría por hombres (68,4%), sin embargo del porcentaje de hogares con jefatura femenina (31,6%), el 68,8% (816.000 hogares) corresponde a familias donde la jefa de familia no tiene cónyuge, y de este porcentual cerca de la mitad tiene hijos menores de 18 años a cargo (DANE, 2022a), en este sentido, las mujeres realizan una cantidad significativa de trabajo en actividades de cuidado familiar, que tradicionalmente no es remunerado. En términos de acceso al mercado de trabajo, no es diferente, las mujeres tienen una tasa de ocupación menor respecto a los hombres rurales siendo del 29,2% y el 68,8% respectivamente, y de las mujeres urbanas donde alcanza el 68,4%, lo que las hace más sensibles al desempleo entre los tres grupos.

Según indicadores socioeconómicos, las mujeres rurales también presentaron durante 2020 porcentuales importantes de pobreza multidimensional (37,3%), siendo superiores respecto de los hombres rurales (36,9%) y de las mujeres urbanas (12,6%), además, más de la mitad de los hogares encabezados por mujeres en las áreas rurales se encuentran en condiciones de pobreza monetaria (DANE, 2022a).

A pesar de su valiosa contribución como productoras agrícolas, las mujeres campesinas tradicionalmente han sido discriminadas en lo que respecta al acceso a tierras y recursos productivos. La mayoría de las fincas son dirigidas por los hombres (73,2%), las mujeres desarrollan la gestión directa en el 24,7% de las propiedades y de forma conjunta entre hombres y mujeres en el 2,1% de las unidades productivas. Si bien estas propiedades no representan ni una tercera parte de las unidades de producción, más del 60% de las fincas dirigidas por campesinas, tienen área menor a 3 hectáreas, por lo que el control de la tierra en Colombia es ejercido por hombres principalmente. En términos de financiación agrícola, los recursos propios son la principal forma de financiación, y el crédito con entidades financieras, mientras los subsidios y apoyos institucionales, así como el crédito en almacenes de insumos agrícolas y el crédito particular resultan ser menos frecuentes. Si bien las fuentes de recursos para el financiamiento entre hombres y mujeres rurales parecen tener cierta proporcionalidad, en relación al acceso y participación del crédito agrícola es inferior en las campesinas (DANE, 2022; DANE, 2019).

Los desafíos que enfrentan las campesinas Colombianas afectan su calidad de vida y su desarrollo integral, por una parte la posición desventajosa en que se encuentran frente a los hombres rurales y las mujeres urbanas, acaba influenciando aspectos como la participación política, el acceso a la educación, o el ejercicio de la subjetividad y la libertad. Las limitaciones a servicios básicos, así como la propensión a la violencia en las áreas rurales, que ha hecho con que el 50,2% de las víctimas del conflicto armado ente 1985 y 2023 sean mujeres, (UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS, 2023), aumenta las posibilidades de que las campesinas continúen viviendo bajo el límite de la vulnerabilidad.

**LEY 731 DE 2002 PRECEDENTES Y ORGANIZACIÓN SOCIAL.**

Tradicionalmente las mujeres que viven en zonas rurales en Colombia han experimentado una situación de invisibilidad por parte del Estado. Durante décadas, han enfrentado desigualdad, discriminación y una brecha de género que resulta determinante en sus condiciones de vida.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011), las mujeres campesinas sufren tres formas de discriminación que repercuten enormemente en sus vidas. En primer lugar, se encuentran en desventaja debido a la discriminación que enfrentan los habitantes rurales en comparación con los urbanos. En segundo lugar, experimentan una deuda de género arraigada en la inequidad tradicional y la diferenciación social entre hombres y mujeres en la sociedad actual. Por último, enfrentan una mayor vulnerabilidad como víctimas de violencia, tanto en el ámbito familiar como en el contexto del conflicto armado. Por esta razón, la búsqueda por condiciones de participación equitativa de los procesos de desenvolvimiento (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 1994) ha demandado un papel activo de las mismas en las últimas décadas. En ese sentido leyes como la 731 de 2002 (Ley de la mujer rural), así como la Política para la Mujer Campesina de 1984, y la Política Integral para las Mujeres Colombianas en 1992, son reflejos de las amplias luchas de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en su reconocimiento como sujetos de derechos (GUTIÉRREZ, 2003).

Estos logros legales, cuentan con varios precedentes de referencia, por un lado las luchas sociales y los procesos organizativos femeninos que en la década de 1980 trasladaron a la agenda política las barreras históricas que enfrentan en el campo, por otra parte, las recomendaciones de organismos internacionales a los gobiernos para la eliminación de las formas de exclusión de las mujeres campesinas. Uno de los compromisos políticos a nivel internacional fue la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer realizada en 1979 por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, esta convención exhorta a los estados de los países adheridos al compromiso, a la modificación de las legislaciones discriminatorias y a la adopción de medidas para la eliminación de todas las formas de discriminación (CRISTIANO, 2022).

Según Ferreras y Secreto (2013), uno de los asuntos principales de reivindicación en muchos movimientos sociales contemporáneos es el acceso a la tierra y la territorialidad. En este caso, el proceso de movilización social de las campesinas colombianas, una de las principales motivaciones fue la discriminación ejercida en los procesos de adjudicación de tierras por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Ley 135 de 1961), que además del establecimiento de obstáculos burocráticos, se basó en limitar el número de mujeres que pudieran ser beneficiarias, así mismo, la adjudicación de tierras a las familias en las que la jefatura del hogar era masculina, ocurría sobre ellos y no de manera conjunta o sobre la mujer de la familia, lo que restringía el acceso de las campesinas a la tierra cuando ocurrían separaciones. Estas cuestiones en términos de acceso a tierra “…constituyeron una de las mayores expresiones de discriminación estructural de las mujeres en el acceso a tierra” (COMISION DE LA VERDAD, 2022).

La reivindicación por la tierra, así como las insatisfacciones derivadas de la negligencia por parte del estado, se expresaron con claridad en 1985 (CRISTIANO, 2022), momento en el cual mujeres comenzaron a demandar la creación de una organización campesina que tuviera un papel protagónico. Estas pretensiones encontraron aceptación en un grupo de campesinas y profesionales que venían desarrollando conversaciones con el Ministerio de Agricultura para la inclusión de la mujer rural en los programas de gobierno. Es así cómo se organiza la realización del Primer Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas en 1985, en el que participaron mujeres vinculadas con organizaciones mixtas, como asociaciones de campesinos, organizaciones sindicales, e instituciones del estado (COMISIÓN DE LA VERDAD, 2022). A partir de este encuentro se crea en 1986 la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC). Inicialmente ANMUCIC tuvo incidencia política en las modificaciones a la ley de reforma agraria (Ley 30 de 1988), en las que se avanzó sobre las adjudicaciones de tierras baldías de forma individual o de manera conjunta con sus cónyuges. Entre 1985 y 1990 ANMUCIC acompañó los espacios de planeación y de toma de decisión en asuntos de política agraria y de paz. Además consiguió consolidarse a nivel nacional con la constitución de 22 asociaciones departamentales y 72 asociaciones municipales, llegando a vincular cerca de 100 mil mujeres a nivel nacional. Para 1991 participa en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente, en la construcción de la nueva Constitución Política y desde mediados de los 90 enfoca su acción en la denuncia de violaciones de derechos humanos en mujeres y sus comunidades rurales debido al contexto de violencia por el conflicto armado en el país (COMISIÓN DE LA VERDAD, 2022)

ANMUCIC desde los 2000 participa de la construcción de la ley 731 de 2002, lo que representa uno de sus principales logros, “...por medio de esta ley se dictan normas para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y se consagran las medidas específicas para acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.” (CORRALES et al, 2002). La ley define a la mujer rural como

“toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada” (Artículo 1 de la ley 731 de 2002).

La Ley 731 de 2002 sentó las bases legales para la protección y promoción de los derechos de las mujeres rurales, reconociendo sus necesidades y particularidades. El abordaje que realiza la ley puede sintetizarse en cinco temas principales: derechos laborales, acceso a servicios y recursos, participación y representación, violencia de género y desarrollo integral.

En términos de avances, se han implementado políticas y programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, promoviendo su participación en espacios de toma de decisiones y brindando acceso a recursos y servicios necesarios. Se han creado instancias gubernamentales y mecanismos de coordinación para garantizar la implementación de la ley y el seguimiento de su cumplimiento. A pesar de estos avances, persisten desafíos en su implementación efectiva, como la falta de recursos adecuados para programas dirigidos a la mujer rural, así como la sensibilización y conciencia sobre sus derechos, la superación de estereotipos de género y la persistencia de las brechas sociales y económicas.

**PROGRAMA DE RESTITUCIÓN DE TIERRA CON ENFOQUE DE GÉNERO.**

La violencia en Colombia ha significado una constante histórica. El conflicto armado contemporáneo que ha ocupado los últimos sesenta años, ha tenido una gran influencia en las dinámicas sociales, productivas y económicas de las poblaciones rurales. En términos generales, la Unidad Para las Víctimas ha reconocido a 9.492.472 víctimas del conflicto armado en uno o varios de los 12 tipos de hechos victimizante consagrados en la ley 1448 de 2011 (UNIDAD PARA LAS VÍCTIMAS, 2023), siendo el 80% de estas víctimas civiles (COMISIÓN DE LA VERDAD, 2022). Uno de los fenómenos derivados de conflicto con mayor impacto en la población rural y que generó el mayor número de víctimas es el desplazamiento forzado (89,1%), un proceso en el que las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares y comunidades debido a la violencia, las violaciones de los derechos humanos, las amenazas o la persecución, viéndose forzadas a escapar en procura de protección y seguridad en otro lugar. Los hechos victimizante por número de víctimas que más afectaron a la población femenina fueron, por una parte, el desplazamiento forzado donde representaron más de la mitad de las víctimas (52%), y del otro las violencias sexuales, donde constituyeron el 92% de las victimas (COMISION DE LA VERDAD, 2023; UNIDAD PARA VÍCTIMAS, 2023; ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFÍA Y SALUD ENDS, 2015).

El desplazamiento forzado resulta ser un fenómeno enormemente complejo con efectos derivados como el abandono o despojo forzado de tierras.

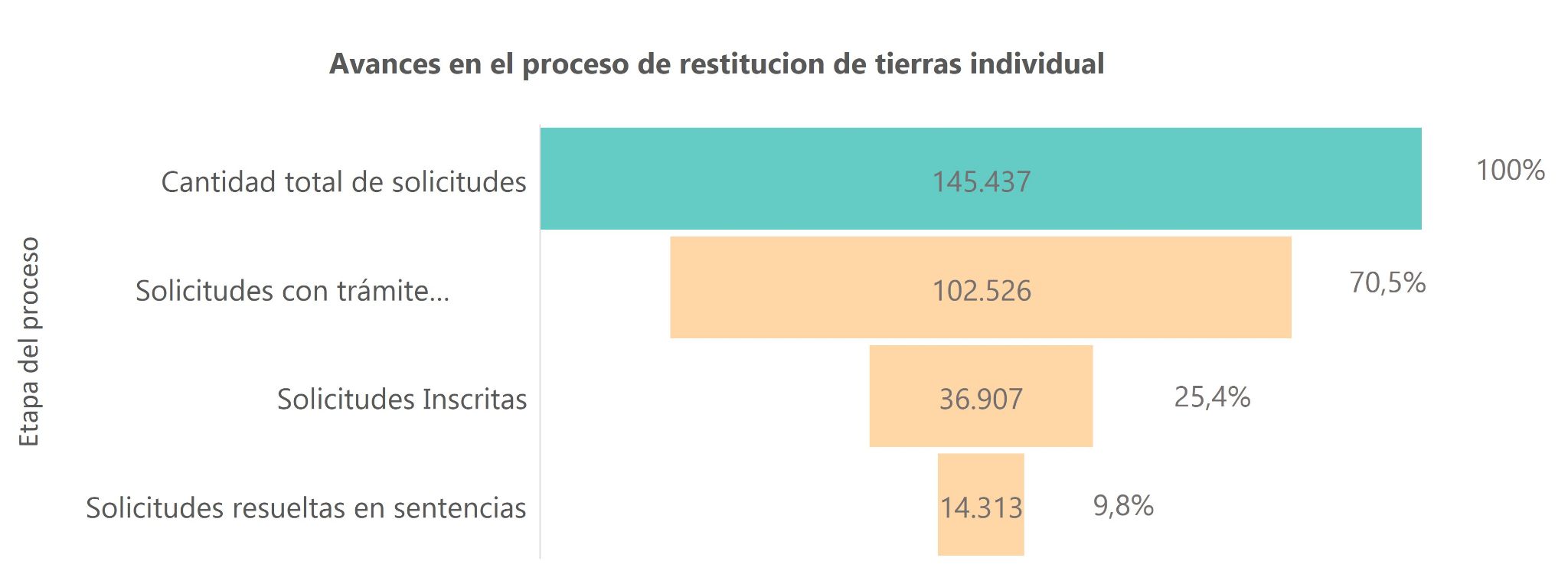
“se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el período establecido…” (Artículo 74 de la ley 1448 de 2011)

De cara a esta realidad que según la Comisión de la Verdad, afectó a aproximadamente 6 millones de hectáreas en todo el país, la ley de víctimas (Ley 1448 de 2011), establece un mecanismo legal para reparar los daños sufridos por las víctimas y restablecer sus derechos sobre la tierra que les fue injustamente arrebatada. En este sentido, consagra un marco legal para el proceso de restitución y formalización de tierras pertenecientes a personas que han sido víctimas de despojo y abandono forzado como consecuencia del conflicto armado a partir de 1991. El procedimiento se compone de tres etapas; 1) La etapa administrativa que implica la inscripción de las tierras objeto de despojo, las víctimas o sus representantes legales deben presentar la solicitud correspondiente ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad encargada de recibir y verificar la información proporcionada. En esta solicitud, se debe indicar de manera detallada la situación de despojo o abandono forzado que se ha experimentado, así como los datos relacionados con la propiedad de la tierra afectada. 2) la etapa judicial, en la que se puede interponer una acción de restitución para reclamar la propiedad de dichas tierras, En esta etapa, la persona que reclama la restitución de su tierra debe presentar pruebas y argumentos legales que respalden su solicitud. 3) etapa de cumplimiento, en esta etapa se materializa a partir de la entrega jurídica y física de las tierras el derecho a la restitución.

La restitución de tierras es una política que ha incluido enfoques diferenciados en la búsqueda por dar respuestas adecuadas a las características de las víctimas, en ese sentido y partiendo del hecho de que un grupo muy significativo de víctimas son mujeres y de las constantes barreras en el acceso a la tierra, así como la existencia de un marco legal que insta a la protección de las mujeres rurales sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad, la URT ha implementado el “Programa Mujeres” para acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras, formalizado mediante el Acuerdo 49 de la URT en 2019. El objetivo del programa es “…garantizar la participación efectiva de las mujeres frente al goce pleno del derecho de restitución, con el fin de contribuir a un desarrollo rural equitativo…” (Artículo 6 del Acuerdo 47 de 2019 URT), y se estructura a partir de 4 ejes de acción; 1) Incorporación del enfoque de género en los procesos que adelanta la URT. 2) Fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de la URT. 3) Empoderamiento de las mujeres para el ejercicio pleno de sus derechos. 3) Gestión de restitución de derechos territoriales. 4) Prevención y gestión de seguridad. El enfoque número uno que tiene una aplicación más directa sobre las etapas del proceso de restitución, enfatiza en la titularidad de la mujer en las solicitudes de restitución cuando se trate de proceso individual y de titulación conjunta, además en la etapa de restitución que contempla la implementación de proyectos productivos, deben ser planificados con la participación y orientación directa de la mujer titular de la restitución del predio (URT, 2021).

Algunos resultados de la implementación de la restitución de tierras desde su conformación en 2012 hasta abril de 2023 en la restitución individual (Grafico 1), muestran que la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 145.437 Solicitudes de restitución, presentadas por 116.007 titulares (42% de las solicitudes realizadas por mujeres víctimas de desplazamiento y despojo), correspondientes a 132.695 predios rurales, Sin embargo solo 102.526 tuvieron trámite administrativo y apenas 36.907 fueron inscritas formalmente. Actualmente han sido resueltas mediante sentencia 14.313 solicitudes de restitución, que representan 11.654 predios con orden de restitución o compensación alcanzando 217.051 hectáreas. Los datos respecto de la restitución de tierras a mujeres indican que 13.939 demandas fueron inscritas formalmente, de estas han recibido sentencia 3.469, para la restitución de 78.919 hectáreas de tierra, beneficiando a 19.642 mujeres (UNIDAD PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS, 2023).

Grafico 1: Avances en la restitución de tierras individual entre 2012 y 2023.

.

Fuente: Unidad de Restitución de tierras, abril de 2023

Por otra parte, la URT contempla una ruta de restitución étnica, que para la misma fecha de corte había restituido 366.759 hectáreas beneficiando a cerca de 50 mil personas en al menos 16.900 familias. El proceso restaurativo que se han encargado a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), ha recibido críticas en los últimos años por el volumen de solicitudes realizadas por las víctimas y la cantidad de estas que llegan a tener trámite administrativo, inscripción y sentencia de restitución, pues en 10 años de funcionamiento de la URT, se ha restituido menos de un 10% de las tierras despojadas que son calculadas en 6 millones de hectáreas. Sin embargo, alrededor del proceso de restitución, las instituciones han venido implementando estrategias y mecanismos para facilitar el acceso de mujeres campesinas víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de tierras, de forma que recuperen su derecho a la propiedad rural y superen las barreras de la vulnerabilidad.

**CONSIDERACIONES FINALES.**

Las mujeres rurales o campesinas han vivido históricamente bajo condiciones de inequidad y discriminación que puede concebirse desde tres puntos de vista, por su origen rural frente a la población urbana, por la valoración que hace la sociedad del papel de las mujeres y los hombres, y por representar el segmento social más afectado por la violencia generada del conflicto armado. Estos procesos han condicionado a una parcela muy grande de campesinas a vivir bajo niveles de pobreza monetaria y multidimensional, con limitado acceso al mercado de trabajo, y a otros servicios que terminan por limitar su autonomía.

Logros legales que actualmente buscan ser implementados para garantizar los derechos humanos y condiciones equitativas para las mujeres, han sido el resultado de la organización y la movilización de las mujeres rurales desde hace más de 30 años, y bajo un contexto de violencia. En esta lógica, el acceso a la tierra y a recursos productivos figura como unas de las necesidades insatisfechas más importantes y determinantes en la incidencia de la pobreza y de reivindicación social. Por otro lado, el contexto de violencia derivada del conflicto armado contemporáneo ha afectado principalmente a las campesinas y ha contribuido enormemente a la condición desventajosa que tienen en la sociedad, que a la vez se refuerza por las estructuras tradicionales que predominan en lo rural.

Finalmente, en relación a la aplicación de las disposiciones que trae consigo la ley 731 de 2002, estas han sido planteadas de maneras transversal en programas públicas a partir de estrategias, instrumentos o enfoques diferenciados, como es el Programa Mujeres, implementado al interior de la política de Restitución de Tierras, como mecanismo de atención restaurativa que consagra la ley para las víctimas del conflicto armado. Este programa, avanza de forma lenta frente a las necesidades y la magnitud de los efectos del despojo, sin embargo ciertamente lo hace sobre un contexto rural de violencia, en que las mujeres rurales han asumido una realidad profundamente compleja.

**REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

Acuerdo 47 de 2019. Por medio del cual se adoptan y definen los ejes de acción del programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras. Bogotá. 2019. Disponivel em:<https://www.urt.gov.co/documents/20124/65844/Acuerdo+No.+47+de+2019.pdf/32d5079c-d9d0-a1c2-e58b-fd298f09362d?t=1576178900692> Acesso em: 01 de junho de 2023.

ACEVEDO, A.; MARTINEZ, J. Introducción. *In*: ACEVEDO, A.; MARTINEZ, J. (org.). **La agricultura familiar en Colombia.Estudios de caso desde la multifuncionalidad y su aporte a la paz**. Bogotá:Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia,2016. p.1-4.

COMISIÓN DE LA VERDAD – **Caso «Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC)».** Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Bogotá, (2022) Disponível em:<https://www.comisiondelaverdad.co/caso-anmucic> Acesso em: 30 de maio de 2023.

COMISIÓN DE LA VERDAD - **Informe Final en cifras.** Bogotá, (2023) Disponível em:<https://www.comisiondelaverdad.co/el-informe-final-en-cifras> Acesso em: 01 de junho de 2023.

CORRALES, E. et al. **Situación de la mujer rural Colombiana. Perspectiva de género. Cuadernos Tierra y Justicia.**  Bogotá. ILSA. 2003.

DANE. **Censo Nacional Agropecuário 2014**. Bogotá. 2014. Disponível em:<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014#:~:text=El%20Tercer%20Censo%20Nacional%20Agropecuario%20fue%20por%20su,satelital%20y%20actualizada%20del%20sector%20agropecuario%20del%20pa%C3%ADs> . Acesso em: 30 de maio de 2023.

DANE- **Comunicado de prensa. Pobreza Monetaria Año 2021**. (2022)b. Bogotá.Disponível em:

<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria> Acesso em: 30 de maio de 2023.

DANE. **Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA). 2019**. Bogota 2020. Disponível em:<https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/encuesta-nacional-agropecuaria-ena#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20Agropecuaria%20%E2%80%93%20ENA,%25>)%2C%204.423.183%20toneladas%20a Acesso em: 31 de maio de 2023.

DANE-**Nota Estadistica. Situación de las Mujeres Rurales en Colombia: Resumen ejecutivo**. Bogota, (2022)a. Disponivel em:<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/oct-2021-nota-estadistica-situacion-mujeres-rurales-colombia-resumen.pdf> Acesso em: 30 de maio e 2022.

FAO. **Reseña agricultura familiar Colombia.** Bogota. 2021. Disponivel em:<https://www.fao.org/3/cb4922es/cb4922es.pdf> Acesso em: 30 de maio de 2023.

FERRERAS, N. O.; SECRETO, M. V. A terra nos movimentos sociais. In: Os pobres e a política. História e Movimentos Sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Mauad/Faperj, 2013.

GUTIERREZ, M. La ley para las mujeres rurales en Colombia: alcances y perspectivas. **Revista de Trabajo Social.** Bogota. No. 5. P 56-80. 2003.

Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Junio 10 de 2011. D.O. N°48096.

LEY 30 DE 1988. Por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a. de 1968 y 4a. de 1973 y se otorgan unas facultades al Presidente de la República. DIARIO OFICIAL. AÑO CXXIV. N. 38264. 22, MARZO, 1988

Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 14 de enero de 2002. D.O. N°44.678.

LEÓN, M. La desigualdad de género en la propiedad de la tierra en América Latina In: Du grain à moudre: Genre, développement rural et alimentation [en línea]. Genève: Graduate Institute Publications, 2011. Disponível em: <http://books.openedition.org/iheid/6756> Acesso: 29 de junho de 2023.

MONTAÑO, M. X Ser mujer en la ruralidad colombiana: la huella histórica de la desigualdad. Disponível em:<https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/ser-mujer-en-la-ruralidad-la-huella-historica-de-la-desigualdad/> Acesso em: 29 de maio de 2023.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Política para el desarrollo de la mujer rural. .Proceso de ejecución 1993-1994 Colombia. Bogota. 1994. Disponivel em:<https://repositorio.iica.int/handle/11324/14479> Acesso em: 30 de maio de 2023.

ONU. **Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.** (1979). Publicación: Diario Oficial Nº 105, tomo 271 Del 9 de junio de 1981.

OXFAM. Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina. Oxfam Internacional. Reino Unido. 2016

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. **Colombia rural razones para la esperanza. Informe de Desarrollo Humano**. Bogota. 2011. Disponivel em :<https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/default/files/ressources/colombia_nhdr_2011.pdf> Acesso em: 30 de maio de 2023.

UNIDAD PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS. **Avances de Restitución** Corte 30 de abril de 2023. Bogota, (2023). Disponivel em :<https://www.urt.gov.co/documents/20124/800026/Infografia_ABR-30-2023.jpg/975be86d-c938-a7de-64f9-5a1212bcbda8?t=1683854012876> Acesso em: 01 de Junho de 2023.

UNIDAD PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS. **Las mujeres en la restitución de tierras.** Bogota. 2021. Disponivel em:<https://www.urt.gov.co/documents/20124/298253/2021marzo08_PPT_DiaMujer.pdf/d78c0fd8-39d0-cb0f-085f-529cd99a9a33?t=1615232796979> Acesso em: 01 de juho de 2023.

CRISTIANO. J.F. Efectividad de las políticas de inclusión de las mujeres rurales en la historia de Colombia (2002-2022): Análisis crítico de la ley 731 de 2002. Tesis Facultad de derecho, Universidad UDCA, Bogotá Colombia 2022.

1. Mestranda em Políticas Públicas e Desenvolvimento. Universidade Federal da Integração Latino- Americana UNILA. Foz do Iguaçu. Paraná. Brasil. E-mail: [lmo.rengifo.2018@aluno.unila.edu.br](mailto:lmo.rengifo.2018@aluno.unila.edu.br). [↑](#footnote-ref-1)
2. Doutor em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Professor adjunto da Universidade Federal da Integração Latino – Americana UNILA. Foz do Iguaçu. Paraná. Brasil. E-mail: [valdemar.junior@unila.edu.br](mailto:valdemar.junior@unila.edu.br) [↑](#footnote-ref-2)